

**MODERNIZACION DEL SISTEMA JURIDICO
(PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA JUDICIAL)**

(TC-94-07-35-6)

RESUMEN EJECUTIVO

SOLICITANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

ORGANISMO EJECUTOR: PROJUSTICIA.

BENEFICIARIO: REPUBLICA DEL ECUADOR

FINANCIAMIENTO:

BID:	US\$2.000.000 (FOE)
Aporte local:	US\$ 400.000
Total:	US\$2.400.000

PLAZOS:

Período de ejecución:	22 meses
Período de desembolso:	28 meses

OBJETIVOS: El objetivo general es apoyar el proceso de reforma judicial en el Ecuador, contribuyendo al fortalecimiento de la independencia judicial, el mejoramiento de los recursos humanos y de la gestión administrativa de la Función Judicial, y facilitando el acceso ciudadano a la justicia.

DESCRIPCION: El Programa incluiría los siguientes componentes:

- (i) **desarrollo legislativo**, destinado a apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite el proceso de reforma judicial en curso;
- (ii) **capacitación, formación y sistema disciplinario**, destinado a fortalecer la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces y funcionarios judiciales, a través del establecimiento e implantación de un sistema permanente y descentralizado de capacitación y formación, que permita su vinculación con la vigencia efectiva de la carrera judicial, y con el fortalecimiento y mejora del sistema disciplinario;
- (iii) **fortalecimiento administrativo de la Función Judicial**, destinado a mejorar su sistema gerencial, facilitando su incorporación al Consejo Nacional de la Judicatura, de tal manera de permitir a las autoridades judiciales concentrarse exclusivamente en su responsabilidad de impartir justicia; y

(iv) acceso a la justicia y sociedad civil, destinado a apoyar iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, encaminadas a disminuir las barreras de acceso ciudadano a la justicia, a través del establecimiento y puesta en marcha de un fondo especial reglamentado para ello.

BENEFICIOS:

El Programa contribuiría a propiciar los consensos necesarios para definir y poner en marcha una amplia reforma judicial, la cual se considera necesaria a partir de las reformas constitucionales vigentes y de la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997, para, entre otros aspectos, lograr la modernización e independencia de la Función Judicial, incluyendo la consolidación de la carrera judicial y una mayor eficiencia y confiabilidad en la prestación de los servicios judiciales.

El Programa contribuiría asimismo a promover el desarrollo de proyectos y actividades de acceso ciudadano a la justicia, con la activa participación de la comunidad.

RIESGOS:

El principal riesgo del Programa estaría asociado con la falta de coordinación y diálogo entre los poderes del Estado para las reformas legislativas correspondientes al primer componente. La no obtención de los consensos y compromisos políticos necesarios para la aprobación definitiva de las propuestas de reforma judicial, constituye un riesgo que se ve aminorado por: (i) el énfasis del Programa en actividades de construcción de consensos que contribuyan a identificar, entre todos los actores involucrados, las líneas principales de las reformas legislativas, lo cual aseguraría el respaldo a la misma; y (ii) la creación de la Comisión Nacional de Apoyo.

Lo anterior no constituye un riesgo para la totalidad del Programa, ya que la operación se ha diseñado de manera que los componentes de capacitación judicial, fortalecimiento administrativo y acceso a la justicia, puedan ejecutarse sin perjuicio de las reformas constitucionales y legislativas contempladas.

**ESTRATEGIA DEL
BANCO EN EL PAIS:**

En el marco de la VIII Reposición de Recursos, el Banco considera importante apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho y la creación de condiciones de estabilidad y previsibilidad jurídica y política, como condición esencial para el establecimiento de un clima apropiado para el desarrollo socio-económico.

Estos lineamientos son consistentes con la estrategia del país, que incluye entre sus objetivos la modernización de los poderes del Estado, y está acorde con los planteamientos del actual gobierno y los esfuerzos que adelanta el país en su proceso de reforma política, en los aspectos relacionados con la reforma judicial. El Programa propuesto espera mejorar el funcionamiento del sistema judicial, para asegurar las condiciones adecuadas de gobernabilidad democrática, aumentar los niveles de confianza ciudadana en la justicia y dar sostenibilidad al cambio económico y social.

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

Previo al primer desembolso del financiamiento deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que: (i) se ha conformado la Comisión de Modernización de la Función Judicial, CMFJ (párrafos 5.2 y 5.4); y (ii) se ha seleccionado al Coordinador del Programa (párrafo 5.4).

Previo al primer desembolso del Componente de Desarrollo Legislativo, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que se ha designado a los miembros de la Comisión Nacional de Apoyo (párrafo 5.3).

Previo a la contratación de los servicios de consultoría para la implantación y transferencia efectiva del sistema de capacitación judicial, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento han sido aprobados por la CMFJ (párrafo 3.5).

Previo a la contratación de los servicios de consultoría para la implantación efectiva del sistema administrativo y a la compra de equipamiento, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento, han sido aprobados por la CMFJ (párrafo 3.7).

Previo al financiamiento de los proyectos definidos en el componente de acceso a la justicia y sociedad civil, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que: (i) se ha conformado el Comité de Aprobación de Proyectos (párrafo 3.10); y (ii) ha entrado en vigencia el Reglamento Operativo (párrafo 3.10).

LICITACIONES:

Las adquisiciones de bienes y servicios se llevarán a cabo según los procedimientos del Banco. La licitación pública internacional regirá para adquisiciones por encima de US\$250.000. Las licitaciones inferiores a estos límites se regirán por los procedimientos vigentes acordados entre Ecuador y el Banco el 15 de septiembre de 1992.

I. ANTECEDENTES

A. Marco General

- 1.1 El Ecuador ha venido adelantando en los últimos años un proceso de reformas estructurales y económicas que abarcan medidas de ajuste macroeconómico, sectorial e institucional, así como reformas políticas que todos los sectores consideran necesarias para dar mayor funcionalidad y estabilidad al sistema de gobernabilidad democrática. Estos esfuerzos no son ajenos al proceso de reforma judicial en curso, el cual apunta al fortalecimiento del sistema de protección de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, para garantizar la estabilidad económica y la paz social.
- 1.2 A partir de 1992, se han adoptado en el Ecuador diversas reformas constitucionales orientadas a afianzar la autonomía de la Función Judicial, modernizar la administración de justicia - para hacerla más ágil y eficiente - y dotar al sistema judicial de los elementos necesarios para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, a través de la creación del Consejo Nacional de la Judicatura. Se crearon constitucionalmente nuevas instituciones para garantizar los derechos ciudadanos, como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, y se modificó formalmente el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, para darle autonomía y mayores responsabilidades en el proceso penal.
- 1.3 Sin embargo, el desarrollo legislativo de carácter secundario o reglamentario correspondiente a las reformas constitucionales y legales mencionadas, particularmente en lo relacionado con la Función Judicial, no se ha puesto en marcha según lo previsto, tanto por falta de acuerdos sobre las orientaciones del mismo, como por dificultades técnicas para su materialización. Por estos motivos, la administración de justicia no ha tenido un cambio sustancial. Según una encuesta nacional de septiembre de 1996 ^{1/}, el 91% de la población considera que la justicia en el país no salvaguarda los intereses del ciudadano común.
- 1.4 El actual gobierno se encuentra muy interesado en adelantar un proceso de reforma política sustantiva para sentar las bases para mejorar el sistema de gobernabilidad democrática, incluyendo modificaciones al sistema judicial, el cual recibió el respaldo mayoritario de la ciudadanía, en virtud de los resultados de una consulta popular que se celebró el día 25 de mayo de 1997. Esta consulta incluyó un mandato al Congreso Nacional para incorporar al más breve plazo en el ordenamiento jurídico nacional, los resultados de la misma.

^{1/} Estudio de opinión sobre la percepción de la administración de justicia en Ecuador. PROJUSTICIA. Septiembre de 1996. Investigación y publicación realizada con el apoyo de USAID.

- 1.5 Los aspectos judiciales incluidos en la consulta, contemplan disposiciones relacionadas con la puesta en marcha de reformas destinadas a la modernización e independencia de la Función Judicial, particularmente en relación con el sistema de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la duración de sus funciones y la observancia de criterios de profesionalización y carrera judicial para garantizar la imparcialidad de los jueces. Además, se incluyó la conformación definitiva del Consejo Nacional de la Judicatura para el desempeño de las tareas administrativas de la Función Judicial, estableciendo que sus miembros sean designados por la Corte Suprema de Justicia.

B. Proceso de reforma de la administración de justicia

- 1.6 Las autoridades nacionales, conscientes de que un sistema legal que no ofrece la suficiente seguridad individual y colectiva disminuye las posibilidades de institucionalizar y poner en marcha los diferentes programas de desarrollo, conformaron en 1992 un grupo de trabajo interinstitucional 2/ presidido por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, encargado de elaborar una estrategia nacional para abordar la problemática de la justicia en el país.
- 1.7 Este grupo de trabajo preparó un documento denominado "Plan Integral de Reformas de la Administración de Justicia en el Ecuador" (en adelante Plan Integral), el que fue presentado por las autoridades nacionales a varios gobiernos extranjeros y a la banca multilateral, para solicitar su apoyo financiero. Este documento constituye una orientación que ha servido como guía a los distintos esfuerzos que se han adelantado en el sector.
- 1.8 La labor del grupo de trabajo se enriqueció con los aportes de los distintos diagnósticos existentes y contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Banco.
- 1.9 En agosto de 1995, el Gobierno del Ecuador constituyó mediante decreto ejecutivo No. 3029, la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia (PROJUSTICIA), adscrita a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Esta Unidad, de acuerdo con su decreto constitutivo, está encargada de llevar a cabo el mencionado Plan Integral y de

2/ En este grupo de trabajo estuvieron representados el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, y organizaciones no gubernamentales comprometidas con el fortalecimiento de la administración de justicia en el país.

coordinar y administrar los recursos provenientes de los convenios vigentes o que se suscriban con los organismos bilaterales o multilaterales de asistencia técnico-financiera, destinados a la reforma y modernización de la administración de justicia, de conformidad con las normas previstas en los convenios respectivos y en las leyes nacionales pertinentes.

- 1.10 La Unidad PROJUSTICIA empezó a funcionar en 1995 con fondos de preparación de proyectos del Banco Mundial. Actualmente se encuentra iniciando la ejecución del proyecto BIRF/6044-EC, así como actividades derivadas de convenios suscritos entre el Gobierno del Ecuador y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y entre PROJUSTICIA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). PROJUSTICIA ejecutaría la presente operación, para lo que el Banco contribuiría con el fortalecimiento de su capacidad en gestión de proyectos.

C. Problemas de la administración de justicia

- 1.11 Los diagnósticos señalan que los principales problemas del sector se relacionan con la falta de independencia, credibilidad e imparcialidad del Poder Judicial y de los jueces. Según la encuesta nacional de septiembre de 1996 mencionada anteriormente, el 88% de la población nacional no tiene confianza en los jueces y el 94% piensa que las decisiones de un juez no son imparciales.
- 1.12 La estructura institucional del sistema judicial presenta limitaciones materiales y de recursos humanos que dificultan el acceso de los ciudadanos a sus servicios, particularmente para la población de escasos recursos. Prácticas administrativas obsoletas con relación a las necesidades actuales de la Función Judicial, obstaculizan el manejo eficiente del presupuesto y del personal, recargando a las autoridades judiciales con actividades que las distraen de sus responsabilidades fundamentales. El Plan Integral subraya además, que las reformas sustantivas, procesales, administrativas o materiales no tendrán impacto sin un sistema permanente de formación de los llamados a ponerlas en práctica.
- 1.13 El despacho de causas sometidas a los tribunales ocupa lapsos sustancialmente superiores a los previstos en la ley para la evacuación de los distintos tipos de procesos. Las dificultades de gestión han generado una gran acumulación de casos sin sentencia, en casi todas las oficinas judiciales (500.000 causas a nivel nacional), lo cual adquiere especial gravedad en materia penal. Por su parte, la prestación de servicios legales es costosa y poco accesible, el sistema de defensoría pública es muy restringido, la población marginal desconoce muchas veces sus derechos, se carece de espacio físico adecuado y la vías alternativas de solución de conflictos en asuntos de mínima cuantía son insuficientes.

D. Participación de agencias internacionales y de apoyo bilateral

- 1.14 Diversos organismos internacionales como UNICEF e ILANUD están apoyando la ejecución del Plan Integral. En la actualidad se ejecutan o están en preparación programas de cooperación en materia de derecho de familia, menores, violencia doméstica y derecho penal. Además, la cooperación bilateral ha visto resultados en los programas emprendidos con USAID, Gran Bretaña y Francia.
- 1.15 Por su parte, el Banco Mundial y el Banco acordaron con el país su participación en los esfuerzos nacionales de reforma judicial, definiendo los campos de trabajo de cada institución y estableciendo el compromiso de los mismos para actuar coordinadamente con el país para apoyar la implantación del Plan Integral.
- 1.16 Se estableció que el Banco apoyaría la reforma judicial con el financiamiento de una cooperación técnica no reembolsable orientada hacia las reformas normativas e institucionales que procuren dar una mayor independencia y funcionalidad al sistema judicial, el establecimiento de un sistema de capacitación ligado a la carrera judicial, el mejoramiento de la gestión administrativa de la Función Judicial y el desarrollo de actividades destinadas a disminuir las barreras de acceso ciudadano a la justicia. Se apoyaría la reforma judicial desde una perspectiva integral, lo cual podría sentar las bases para una eventual segunda etapa de inversiones en el sector.
- 1.17 El Banco Mundial aprobó en marzo de 1997 una operación de préstamo por US\$10.7 millones, con una contrapartida local de US\$3.6 millones. La operación incluye básicamente actividades de mejora en la gestión de los despachos judiciales; métodos alternos anexos a los tribunales; financiamiento de estudios específicos en materia legal y de proyectos de mejora del sistema de justicia, incluyendo estudios sobre la profesión legal y de los programas de derecho en las universidades; y dotación de equipamiento e infraestructura física. PROJUSTICIA se encuentra iniciando su ejecución, encontrándose la mayor parte de los términos de referencia aprobados por el Banco Mundial y publicado el anuncio de licitación para el componente de gestión de despachos.

E. Estrategia y experiencia del Banco

- 1.18 En el marco de la VIII Reposición de Recursos, el Banco considera importante apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho y la creación de condiciones de estabilidad y previsibilidad jurídica y política, como condición esencial para el establecimiento de un clima apropiado para el desarrollo socio-económico.
- 1.19 El Banco ha venido acompañando el proceso de preparación del Plan Integral y ha contribuido en talleres de definición de estrategias y prioridades, con consultoría especializada. Asimismo, se encuentra en ejecución, con recursos del FOMIN, el Programa para el Establecimiento de Centros de Entrenamiento y Difusión de Métodos

Alternos de Solución de Controversias Comerciales (ATN/MT-5440-EC), con las Cámaras de Comercio de las ciudades de Quito y Guayaquil. Este proyecto contribuirá a descongestionar los despachos judiciales en materias mercantiles y a promover para el sector privado, sistemas más eficientes de solución especializada de conflictos, en aquellos aspectos susceptibles de transacción comercial.

- 1.20 En los últimos años el Banco ha venido acumulando experiencias en el diseño de operaciones en el sector justicia de otros países de la región, sobre las que aún no es posible evaluar lecciones a nivel de su ejecución. Sin embargo, se puede mencionar como recomendación, que los procesos de reforma deben involucrar a todos los afectados en las actividades de búsqueda de los compromisos y consensos necesarios, para darle sostenibilidad. Por otro lado, la ejecución de este tipo de operaciones debe ser flexible e incorporar actividades de evaluación y seguimiento continuo, para introducir los ajustes necesarios y lograr sus objetivos.
- 1.21 Estos lineamientos son consistentes con la estrategia del país, que incluye entre sus objetivos la modernización de los poderes del Estado, y está acorde con los planteamientos del actual gobierno y los esfuerzos que adelanta el país en su proceso de reforma política, en los aspectos relacionados con la reforma judicial. El Programa propuesto espera mejorar el funcionamiento del sistema judicial, para asegurar las condiciones adecuadas de gobernabilidad democrática, aumentar los niveles de confianza ciudadana en la justicia y dar sostenibilidad al cambio económico y social.

II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

A. Objetivo General

- 2.1 El objetivo general es apoyar el proceso de reforma judicial en el Ecuador, contribuyendo con el fortalecimiento de la independencia judicial, el mejoramiento de los recursos humanos y de la gestión administrativa de la Función Judicial, y facilitando el acceso ciudadano a la justicia.

B. Objetivos Específicos

- 2.2 El Programa tendrá los siguientes objetivos específicos:
 - a. Apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite la reforma judicial en curso.
 - b. Fortalecer la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces y funcionarios judiciales, a través del establecimiento de un sistema permanente y descentralizado de capacitación y formación, que permita su vinculación con la vigencia efectiva de la carrera judicial, y con el fortalecimiento y mejora del sistema disciplinario.

- c. Mejorar el sistema administrativo de la Función Judicial, facilitando su incorporación al Consejo Nacional de la Judicatura, de tal manera de permitir a las autoridades judiciales concentrarse exclusivamente en su responsabilidad de impartir justicia.
- d. Apoyar iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, encaminadas a disminuir las barreras de acceso ciudadano a la justicia.

III. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A. Descripción

- 3.1 El Programa incluiría los siguientes componentes: (i) desarrollo legislativo; (ii) capacitación, formación y sistema disciplinario; (iii) desarrollo administrativo de la Función Judicial; y (iv) acceso a la justicia y sociedad civil.

a. Desarrollo Legislativo

- 3.2 Este componente incluiría:

- (i) financiamiento de un grupo de consultores que: (a) genere propuestas alternativas técnicamente viables y elabore los anteproyectos respectivos de reforma constitucional, incluyendo el sistema de nombramiento de jueces y magistrados, la duración de sus funciones, la carrera judicial y la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura; (b) genere propuestas alternativas técnicamente viables y elabore los anteproyectos de legislación secundaria y reglamentaria, correspondiente al Consejo Nacional de la Judicatura; y (c) elabore el anteproyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Estas propuestas incluirán análisis cuantitativos sobre el costo y financiamiento de la puesta en marcha de los mecanismos institucionales y legales que se propongan;
- (ii) financiamiento de un grupo de consultores que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, elabore un estudio sobre el papel del Ministerio Público dentro del sistema penal ecuatoriano, que incluya recomendaciones concretas para la implantación efectiva de sus nuevas responsabilidades institucionales, incluyendo el análisis de su marco normativo, reglamentario, presupuestario y administrativo;
- (iii) financiamiento de un estudio, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo, para mejorar el funcionamiento de la defensoría pública y la ampliación de su cobertura, que permita sentar las bases

para el desarrollo de programas de mejoramiento institucional; y

- (iv) realización de actividades de difusión, apoyo técnico, información y generación de consensos, con miras a lograr las condiciones necesarias para la aprobación e implantación de las propuestas desarrolladas en los grupos de consultoría mencionados anteriormente.

3.3 Para la ejecución de este componente se requerirá contratar los servicios de consultoría y realizar las actividades que se detallan en las categorías de indicadores del Anexo I.

b. Capacitación, formación y sistema disciplinario

3.4 Este componente incluiría:

- (i) el diseño de un sistema institucional permanente de capacitación y formación vinculado con la carrera judicial (formación inicial especializada y educación continua con énfasis en el desarrollo de habilidades y aptitudes), incluyendo su marco legal y reglamentario; la definición de la estructura, composición y funcionamiento de la unidad encargada de supervisar las actividades de capacitación; una definición de las actividades que se ejecutarán directamente y de las que se contratarán (con universidades, agencias especializadas, institutos de capacitación, etc.), estableciendo los términos de dicha contratación; y los mecanismos de certificación, registro y financiamiento del sistema;
- (ii) la identificación de las necesidades de capacitación de jueces y funcionarios judiciales, incluyendo una definición del perfil de los jueces y funcionarios judiciales, y con base en esto se determine las materias sustantivas y las metodologías de enseñanza; la elaboración de propuestas curriculares, reglamentos y manuales de concursos, selección y evaluación de postulantes; la elaboración de sistemas de evaluación y seguimiento; realización de seminarios y talleres de difusión y discusión de propuestas; y el desarrollo de actividades concretas de capacitación en gestión de proyectos a los encargados de dirigir el sistema;
- (iii) la implantación efectiva del sistema y la realización de actividades específicas de capacitación y de capacitación de capacitadores, durante la ejecución del Programa, incluyendo entrenamiento especializado en derecho, regulación y control ambiental, así como en materia de derecho de familia y de la mujer; y
- (iv) la evaluación del sistema disciplinario, que incluya el comportamiento ético de los jueces y recomendaciones

concretas para su fortalecimiento, incluyendo un taller de generación de consensos para su implantación.

- 3.5 Para la ejecución de este componente se requerirá contratar los servicios de consultoría y realizar las actividades que se detallan en las categorías de indicadores del Anexo I. Previo a la contratación de los servicios de consultoría para la implantación y transferencia efectiva del sistema de capacitación judicial, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento han sido aprobados por la Comisión de Modernización de la Función Judicial, descrita más adelante.

c. Fortalecimiento administrativo de la Función Judicial

- 3.6 Este componente incluiría:

- (i) el diseño de un nuevo sistema administrativo que considere las propuestas financiadas por la USAID y facilite su incorporación al Consejo Nacional de la Judicatura. Este diseño deberá incluir, entre otros aspectos, la descentralización del sistema administrativo, la reorganización de sus actuales dependencias, la reasignación de funciones, la adopción de nuevas metodologías de gestión, la elaboración e implantación de manuales operativos, la creación de sistemas modernos de planificación física, financiera y de personal; y el mejoramiento de los sistemas de información, incluyendo un plan de informatización y estadística; y
- (ii) la implantación efectiva del sistema, incluyendo la capacitación del personal, actividades de evaluación y seguimiento y la dotación de equipamiento informático, en función de lo establecido anteriormente.

- 3.7 Para la ejecución de este componente se requerirá contratar los servicios de consultoría y realizar las actividades que se detallan en las categorías de indicadores del Anexo I. Previo a la contratación de los servicios de consultoría para la implantación efectiva del sistema y a la compra de equipamiento, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento, han sido aprobados por la Comisión de Modernización de la Función Judicial descrita más adelante.

d. Acceso a la Justicia y sociedad civil

- 3.8 Este componente incluiría:

- (i) La creación y reglamentación de un fondo especial que financie la ejecución y evaluación del desempeño de pequeños proyectos sostenibles de acceso a la justicia diseñados y propuestos por organizaciones de la sociedad civil;

- (ii) el desarrollo de actividades de difusión de la existencia del fondo, dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil;
- (iii) la ejecución de proyectos por parte de organizaciones de la sociedad civil, dirigidos a la población de escasos recursos y particularmente a la mujer, la familia, los niños, las comunidades indígenas y las minorías étnicas, en temas tales como defensa legal, educación legal popular y uso de medios alternos de resolución de conflictos; y
- (iv) el seguimiento y la evaluación de los proyectos financiados por el fondo.

3.9 Para la ejecución de este componente se requerirá contratar los servicios de consultoría y realizar las actividades que se detallan en las categorías de indicadores del Anexo I, incluyendo la contratación de una consultoría especializada para el diseño de un reglamento operativo. Este reglamento operativo establecerá los mecanismos de funcionamiento del fondo y los criterios de selección de propuestas. Regulará la tramitación de solicitudes provenientes de organizaciones de la sociedad civil y su aprobación, así como la ejecución y seguimiento de pequeños proyectos de acceso ciudadano a la justicia, especialmente dirigido a los grupos mencionados en el párrafo 3.8 (iii) anterior.

3.10 Para la selección y aprobación de proyectos, se conformará un Comité de Aprobación de Proyectos compuesto por el Director de PROJUSTICIA, el Coordinador del Programa y tres miembros adicionales seleccionados de acuerdo con los procedimientos del Banco por PROJUSTICIA y de conformidad con el Reglamento Operativo del fondo. La entrada en vigencia del Reglamento Operativo mencionado en el párrafo anterior y la conformación del Comité de Aprobación de Proyectos, será condición previa al financiamiento de los proyectos.

B. Costo y financiamiento

3.11 El costo total del Programa se estima en el equivalente de US\$2.400.000. El aporte del Banco será hasta por el equivalente de US\$2.000.000 no reembolsables, con cargo a los recursos del Fondo de Operaciones Especiales. Los aportes de contrapartida serán del orden del equivalente de US\$400.000, según el siguiente cuadro de costos (ver Anexo II, Presupuesto Detallado):

PRESUPUESTO RESUMIDO DEL PROGRAMA (US\$ miles)

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA JUDICIAL			
	BANCO	LOCAL	TOTAL
1. Desarrollo Legislativo	410.500	68.800	479.300
2. Capacitación, formación y sistema disciplinario	432.200	53.000	485.200
3. Desarrollo administrativo función judicial	349.000	50.000	399.000
4. Acceso a la justicia y sociedad civil	568.500	7.200	575.700
Subtotal	1.760.200	179.000	1.939.200
Coordinación	125.400	176.000	301.400
Apoyo General	34.477	30.000	64.477
Imprevistos	79.923	15.000	94.923
TOTAL	2.000.000	400.000	2.400.000

IV. CALIDAD AMBIENTAL E IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA

- 4.1 El Programa procuraría mejorar la aplicación de los derechos ambientales, específicamente en las actividades de capacitación y formación. Además, el Programa tiene un impacto social importante. Por un lado, a través del apoyo al proceso de reforma judicial, se espera mejorar cualitativamente la oferta de servicios judiciales y, por otra parte, a través del establecimiento y el desarrollo de un fondo especial reglamentado, se facilitará el financiamiento de actividades de acceso ciudadano a la justicia, destinado a satisfacer la demanda de los sectores sociales de bajos ingresos, procurando beneficiar a la familia, la niñez, la mujer, las comunidades indígenas y las minorías étnicas.

V. EJECUCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

A. Esquema de ejecución

- 5.1 El Programa sería ejecutado por la Unidad Coordinadora PROJUSTICIA, adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Con cargo al financiamiento del Banco, se incorporarán a PROJUSTICIA un Coordinador del Programa, un asistente y un contador, los que se encargarían de apoyar a PROJUSTICIA en la ejecución de esta cooperación técnica. El convenio se suscribiría con la República del Ecuador, beneficiaria de la cooperación técnica, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además suscribiría el convenio, la Corte Suprema de Justicia. Se abriría una cuenta especial en el Banco Central del Ecuador a nombre de PROJUSTICIA, para la ejecución del Programa.

- 5.2 Se establecería una instancia de orientación general del Programa denominada Comisión de Modernización de la Función Judicial (CMFJ), la que se encargará de velar por el desarrollo adecuado del Programa y de fijar las pautas generales. La CMFJ estará encabezada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrada por delegados de cada una de las áreas especializadas de la Corte (Civil, Laboral, Penal, Administrativa y Fiscal). Esta comisión estaría encargada, además, de designar al delegado técnico de la Función Judicial, en la Comisión Nacional de Apoyo descrita en el párrafo siguiente.
- 5.3 Para la ejecución del primer componente de desarrollo legislativo, se conformaría además una comisión integrada por delegados técnicos designados por cada una de las tres funciones (poderes) del Estado, que se denominaría Comisión Nacional de Apoyo. Esta comisión coordinaría y aprobaría, sobre una base técnica, las propuestas de reforma judicial, asimismo, procuraría mantener el debido liderazgo, coherencia y continuidad del proceso. Además, sería la instancia de relación entre los poderes del Estado, apoyando técnicamente el consenso requerido, para las reformas legislativas que se propongan.
- 5.4 La creación formal de la CMFJ, sería condición previa al primer desembolso de la operación. La selección del Coordinador del Programa sería condición previa al primer desembolso de la operación. La creación formal de la Comisión Nacional de Apoyo, sería condición previa para el desembolso del componente de desarrollo legislativo.

B. Adquisiciones y servicios de consultoría

- 5.5 La selección y contratación de servicios y las adquisiciones de equipos y materiales previstos en el Programa se efectuará de acuerdo con los procedimientos del Banco. Las adquisiciones de bienes y servicios se llevarán a cabo según los procedimientos del Banco. La licitación pública internacional regirá para adquisiciones por encima de US\$250.000. Las licitaciones inferiores a estos límites se regirán por los procedimientos vigentes acordados entre Ecuador y el Banco el 15 de septiembre de 1992. Previa la no objeción del Banco, PROJUSTICIA procesaría las licitaciones y contrataciones respectivas, suscribiría los contratos y efectuaría el control del cumplimiento de las cláusulas contractuales y de los pagos pertinentes. Los términos de referencia se encuentran en los archivos técnicos del Programa.

C. Período de ejecución

- 5.6 El período de ejecución del programa será de 22 meses contados a partir de la fecha de vigencia del convenio de cooperación técnica, con un período de desembolsos de 28 meses.

D. Reconocimiento de gastos

- 5.7 Dado el acelerado proceso de reforma política que se adelanta en el país, el cual incluye aspectos sustantivos de la reforma judicial, se estima que con anterioridad a la aprobación del Programa, se prevé dar inicio a las siguientes actividades descritas en los párrafos 3.2(i) y 3.2(iv), respecto al componente de Desarrollo Legislativo:
- (i) financiamiento de un grupo de consultores que: (a) genere propuestas alternativas técnicamente viables y elabore los anteproyectos respectivos de reforma constitucional, incluyendo el sistema de nombramiento de jueces y magistrados, la duración de sus funciones, la carrera judicial y la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura; (b) genere propuestas alternativas técnicamente viables y elabore los anteproyectos de legislación secundaria, correspondiente al Consejo Nacional de la Judicatura; y (c) elabore el anteproyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Estas propuestas incluirán análisis cuantitativos sobre el costo y financiamiento de la puesta en marcha de los mecanismos institucionales y legales que se propongan; y
 - (ii) realización de actividades de difusión, apoyo técnico, información y generación de consensos, con miras a lograr las condiciones necesarias para la aprobación e implantación de las propuestas desarrolladas en los grupos de consultoría mencionados anteriormente.
- 5.8 En virtud de lo anterior, se prevé un reconocimiento de gastos hasta por un monto equivalente de US\$80.000, para la realización de las actividades mencionadas en el párrafo precedente. Para efectos de considerar este reconocimiento de gastos, se requerirá que se haya conformado previamente la Comisión Nacional de Apoyo, a la que se refiere el párrafo 5.3 anterior.
- 5.9 Estos gastos cubrirían la contratación de 4 consultores nacionales que representen distintas disciplinas y corrientes de opinión, por un período de dos meses cada uno; 2 consultores internacionales, por un período de un mes cada uno; y 1 asistente nacional de apoyo a PROJUSTICIA por 3 meses. Además, cubriría los costos para la realización de reuniones técnicas de trabajo entre las tres funciones del Estado, 1 taller con la Función Judicial, 1 seminario con el Congreso Nacional y un foro nacional Estado-Sociedad Civil, incluyendo la contratación de 3 expertos internacionales para las distintas conferencias, por un total de 9 días.

E. Condiciones contractuales especiales

- 5.10 Previo al primer desembolso del financiamiento deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que: (i) se ha conformado la Comisión de Modernización de la Función Judicial, CMFJ (párrafos 5.2 y 5.4); y (ii) se ha seleccionado al Coordinador del Programa (párrafo 5.4).
- 5.11 Previo al primer desembolso del Componente de Desarrollo Legislativo, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que se ha designado a los miembros de la Comisión Nacional de Apoyo (párrafo 5.3).
- 5.12 Previo a la contratación de los servicios de consultoría para la implantación y transferencia efectiva del sistema de capacitación judicial, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento han sido aprobados por la Comisión de Modernización de la Función Judicial (párrafo 3.5).
- 5.13 Previo a la contratación de los servicios de consultoría para la implantación efectiva del sistema administrativo y a la compra de equipamiento, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento, han sido aprobados por la Comisión de Modernización de la Función Judicial (párrafo 3.7).
- 5.14 Previo al financiamiento de los proyectos definidos en el componente de acceso a la justicia y sociedad civil, deberá presentarse evidencia a satisfacción del Banco de que: (i) se ha conformado el Comité de Aprobación de Proyectos (párrafo 3.10); y (ii) ha entrado en vigencia el Reglamento Operativo (párrafo 3.10).

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A. Supervisión e informes

- 6.1 **Reuniones de seguimiento.** Se realizarían reuniones de evaluación para examinar el avance en la ejecución del Programa cada 6 meses, contados desde el inicio de la ejecución del mismo, con base en los informes de progreso que presente PROJUSTICIA.
- 6.2 **Informes intermedios.** Al inicio de cada semestre de ejecución del Programa, PROJUSTICIA deberá presentar a satisfacción del Banco, informes de progreso que contengan: (i) el avance de las actividades previstas; (ii) el avance de los desembolsos en relación con los desembolsos previstos y las erogaciones realizadas imputables a las contrapartidas; (iii) un resumen de las recomendaciones de los consultores contratados y copia de los documentos finales producidos por estos; (iv) copia de los documentos oficiales que recojan las medidas o resoluciones adoptadas en aplicación de las recomen-

daciones e informes de los consultores; y (v) una propuesta detallada del plan de actividades a desarrollar en el siguiente semestre.

- 6.3 **Informe Final.** Dentro de los tres meses siguientes a la finalización del Programa, PROJUSTICIA presentará un informe final con un resumen de las actividades desarrolladas, el destino de los gastos realizados con recursos del Banco y de la contrapartida, los resultados alcanzados, las decisiones adoptadas como consecuencia de la ejecución del Programa, y los resultados que se obtuvieron a raíz de su implantación.

B. Auditoría y control

- 6.4 **Informes Financieros.** Sobre la base de un plan de cuentas uniforme, elaborado por PROJUSTICIA, se llevaría la contabilidad del Programa de acuerdo con las categorías del Banco.
- 6.5 Dentro de los primeros tres meses del primer año de ejecución del Programa y al finalizar la misma, PROJUSTICIA presentaría al Banco un informe financiero sobre el uso de los recursos del Programa. Los informes financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes que el Banco considere aceptable y que será contratada por PROJUSTICIA. La firma auditora consolidará la información contable con base en los informes presentados por PROJUSTICIA.

VII. BENEFICIOS Y RIESGOS

A. Beneficios

- 7.1 El Programa contribuiría a propiciar los consensos necesarios para definir y poner en marcha una amplia reforma judicial, la cual se considera necesaria a partir de las reformas constitucionales vigentes y de la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997, para, entre otros aspectos, lograr la modernización e independencia de la Función Judicial, incluyendo la consolidación de la carrera judicial y una mayor eficiencia y confiabilidad en la prestación de los servicios judiciales.
- 7.2 El Programa contribuiría asimismo a promover el desarrollo de proyectos y actividades de acceso ciudadano a la justicia, con la activa participación de la comunidad.

B. Riesgos

- 7.3 El principal riesgo del Programa estaría asociado con la falta de coordinación y diálogo entre los poderes del Estado para las reformas legislativas correspondientes al primer componente. La no obtención de los consensos y compromisos políticos necesarios para la aprobación definitiva de las propuestas de reforma judicial,

constituye un riesgo que se ve aminorado por: (i) el énfasis del Programa en actividades de construcción de consensos que contribuyan a identificar, entre todos los actores involucrados, las líneas principales de las reformas legislativas, lo cual aseguraría el respaldo a la misma; y (ii) la creación de la Comisión Nacional de Apoyo.

- 7.4 Lo anterior no constituye un riesgo para la totalidad del Programa, ya que la operación se ha diseñado de tal manera de que los componentes de capacitación judicial, fortalecimiento administrativo y acceso a la justicia, puedan ejecutarse sin perjuicio de las reformas constitucionales y legislativas contempladas.

MARCO LOGICO

Ecuador

Programa de Apoyo a la Reforma Judicial
(TC-94-07-35-6)

COMPONENTE No. 1 Desarrollo Legislativo			
Objetivo: Apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite la reforma judicial de acuerdo con las reformas constitucionales vigentes y los lineamientos de la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997.			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1.1 Constitución y funcionamiento de 3 grupos multidisciplinarios de trabajo, para la elaboración de propuestas de reforma normativa.	Grupos de trabajo en funcionamiento. 1 mes de iniciada la ejecución del Programa (i.e.p.)	Propuestas elaboradas y aprobadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Conformación de la Comisión Nacional de Apoyo, integrada por delegados técnicos designados por cada una de las 3 funciones del Estado. - Adecuada conformación de los grupos de trabajo, desde el punto de vista profesional y técnico, representando distintas disciplinas y corrientes de opinión.

COMPONENTE No. 1 Desarrollo Legislativo			
<p>Objetivo: Apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite la reforma judicial de acuerdo con las reformas constitucionales vigentes y los lineamientos de la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997.</p>			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1.1.1 Implantación de las reformas constitucionales vigentes y del mandato de la consulta popular (25.05.97), en materia de Consejo Nacional de la Judicatura, nombramiento de magistrados y jueces, y Ley Orgánica de la Función Judicial.	Contratación de 6 Consultores (4 nacionales y 2 internacionales) a los 30 días i.e.p., 2 meses por consultor nacional y 1 mes por consultor internacional para la 1a. fase; 3 meses por consultor nacional y 2 meses por consultor internacional para la etapa de reglamentación.	Propuesta de reformas constitucionales y legales, con recomendaciones concretas para su implantación, que incluyan los proyectos respectivos, elaborados y aprobados por la Comisión Nacional de Apoyo. (3 meses i.e.p.) Propuesta de reformas reglamentarias que incluyan los textos respectivos (3 meses desde la aprobación de las reformas constitucionales y legales por el Congreso Nacional).	Exista la debida coordinación y diálogo entre las tres funciones del Estado. Posibilidad de abordar la reforma en el nivel en que se encuentre al inicio de la ejecución del Programa. Que se cumpla con los cronogramas establecidos y se contraten las consultorías adecuadas. Para la etapa de reglamentación se requerirá contar con la legislación pertinente, por parte del Congreso Nacional.
1.1.2 Estudio respecto al Ministerio Público y la implantación de sus nuevas responsabilidades institucionales, en el que se incluirá su marco normativo, reglamentario, presupuestario y administrativo.	Contratación de 6 consultores (3 nacionales y 3 internacionales) o una agencia especializada internacional que incluya la participación de consultores nacionales, contratados a los 180 días i.e.p. (3 meses de consultoría)	Estudio elaborado y aprobado (10 meses i.e.p.).	Participación de la Fiscalía General de la Nación. Que se cumpla con los cronogramas establecidos y se contraten las consultorías adecuadas.

Objetivo: Apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite la reforma judicial de acuerdo con las reformas constitucionales vigentes y los lineamientos de la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997.

ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1.1.3 Estudio para el mejor funcionamiento de la defensoría pública y la ampliación de su cobertura.	Contratación de 2 Consultores (1 profesional nacional y 1 internacional) contratados a los 90 días i.e.p. (2 meses de consultoría)	Estudio elaborado y aprobado (6 meses i.e.p.).	Participación de la Defensoría del Pueblo. Que se cumpla con los cronogramas establecidos y se contraten las consultorías adecuadas.
1.2 Realización de actividades de difusión, apoyo técnico, información y generación de consensos, con miras a lograr las condiciones necesarias para la aprobación e implantación de las propuestas.	Distribución de las propuestas aprobadas por el Comité Asesor a sectores y actores involucrados. - 3 meses para 1.1.1 - 10 meses para 1.1.2 - 6 meses para 1.1.3 Contratación de 5 expertos internacionales para las distintas conferencias (3 días por consultor) Contratación de las consultorías adicionales que se juzgue necesarias de común acuerdo entre PROJUSTICIA y el Banco. (Hasta un máximo de 10 meses consultor).	Realización de los eventos propuestos. Estudios y propuestas elaboradas y aprobadas. (Hasta 18 meses i.e.p.)	Se logren los consensos necesarios para la vigencia e implantación de las reformas propuestas. Existencia de iniciativas adicionales y solicitud de asistencia técnica por parte de PROJUSTICIA.

COMPONENTE No. 1 Desarrollo Legislativo			
Objetivo: Apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite la reforma judicial de acuerdo con las reformas constitucionales vigentes y los lineamientos de la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997.			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1.2.1 Reformas constitucionales y consulta popular	Contratación agencia especializada en organización de eventos (3 meses i.e.p.) para la realización de 1 taller de trabajo con la Función Judicial; 3 talleres regionales de involucramiento de la sociedad civil; 1 seminario con el Congreso Nacional; y un foro nacional Estado-sociedad civil. (6 meses i.e.p.)	Elaboración de informes que incorporen conclusiones, observaciones y modificaciones a las propuestas originales, con base en los consensos logrados. (6 meses i.e.p.). Proyectos de Reforma Constitucional y Legislativa presentados al Congreso Nacional (6 meses i.e.p.).	La participación efectiva de los actores fundamentales en el proceso. La obtención de los consensos y compromisos políticos necesarios para la aprobación definitiva de las propuestas de reforma judicial.
1.2.2 Ministerio Público y Defensoría de oficio	Contratación agencia especializada en organización de eventos (10 meses i.e.p.) para la realización de 6 talleres regionales de involucramiento; y de 1 foro nacional. (15 meses i.e.p.)	Elaboración de informes que incorporen las modificaciones consensuadas de las propuestas originales. (15 meses i.e.p.)	Participación de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. La obtención de los consensos y compromisos políticos necesarios para sentar las bases de un proceso de fortalecimiento del Ministerio Público y del sistema de defensoría pública.

COMPONENTE No. 2 Capacitación, Formación y Sistema Disciplinario			
<p>Objetivo: Fortalecer la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces y funcionarios judiciales, a través del establecimiento e implantación de un sistema permanente y descentralizado de capacitación y formación, que permita su vinculación con la vigencia efectiva de la carrera judicial, y con el fortalecimiento y mejora del sistema disciplinario.</p>			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>2.1 (i) el diseño de un sistema institucional permanente de capacitación y formación judicial vinculado con la carrera funcionaria.</p> <p>(ii) la identificación de las necesidades de capacitación de jueces y funcionarios judiciales.</p>	<p>Contratación de una firma consultora internacional especializada, dentro de los primeros 180 días (i.e.p.), por 3 meses (distribuidos en un año de labores), para el estudio, diseño participativo, implantación inicial, entrenamiento y seguimiento del desempeño de la firma local, y evaluación ulterior del funcionamiento del sistema en la Función Judicial.</p>	<p>Sistema diseñado y aprobado por la Comisión Nacional de Modernización de la Función Judicial.</p>	<p>Voluntad política de la Función Judicial y oportuna asignación presupuestaria.</p> <p>Selección y contratación de los servicios de consultoría adecuados.</p>
<p>(iii) la implantación efectiva del sistema, incluyendo la realización de actividades específicas de capacitación y de capacitación de capacitadores, durante la ejecución del Programa, incluyendo entrenamiento especializado en derecho, regulación y control ambiental, así como en materia de derecho de familia y de la mujer.</p>	<p>Contratación de una firma consultora local (12 meses), tan pronto la firma internacional esté en capacidad de transferir a aquella las tareas de capacitación específica, la administración inicial del sistema y el entrenamiento del Poder Judicial para su incorporación definitiva a los 15 meses (i.e.p.).</p>	<p>Sistema evaluado positivamente e incorporado organizacional y presupuestariamente en el Poder Judicial a los 15 meses (i.e.p.).</p>	<p>Evidencia al Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento han sido aprobados por la Comisión de Modernización del Poder Judicial.</p>

COMPONENTE No. 2 Capacitación, Formación y Sistema Disciplinario			
<p>Objetivo: Fortalecer la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces y funcionarios judiciales, a través del establecimiento e implantación de un sistema permanente y descentralizado de capacitación y formación, que permita su vinculación con la vigencia efectiva de la carrera judicial, y con el fortalecimiento y mejora del sistema disciplinario.</p>			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
2.2 Evaluación del sistema disciplinario, que incluya el comportamiento ético de los jueces y recomendaciones concretas para su fortalecimiento, incluyendo un taller de generación de consensos para su implantación.	<p>Contratación de 1 consultor internacional por 2 meses, a los 10 meses (i.e.p.).</p> <p>Realización de 1 taller de trabajo con abogados y jueces. (13 meses i.e.p.).</p>	<p>Estudio realizado y aprobado por la Comisión de Modernización de la Función Judicial. (14 meses i.e.p.).</p>	<p>Generación de los consensos adecuados para su implantación.</p>

COMPONENTE No. 3 Fortalecimiento Administrativo de la Función Judicial			
Objetivo: Mejorar el sistema administrativo de la Función Judicial, facilitando su incorporación al Consejo Nacional de la Judicatura, de tal manera de permitir a las autoridades judiciales concentrarse exclusivamente en su responsabilidad de impartir justicia, de acuerdo con lo resuelto en la Consulta Popular del 25 de mayo de 1997.			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
3.1 Diseño e implantación del nuevo sistema administrativo de la Función Judicial, que evalúe y considere propuestas existentes.	Contratación de firma(s) consultora(s) nacional(es) para el diseño del nuevo sistema que cuente con asesoría internacional especializada (6 meses); y en una segunda etapa, para la implantación del sistema, capacitación del personal, evaluación y seguimiento. (Hasta por 12 meses de consultoría, a los 3 meses i.e.p.).	<p>Nuevo sistema administrativo diseñado y aprobado por la CMFJ (6 meses i.e.p.).</p> <p>Nuevo sistema en ejecución, que incluya: descentralización, reorganización de las actuales dependencias, reasignación de funciones, adopción de nuevas metodologías de gestión, manuales operativos modernos, creación de sistemas modernos de planificación física, financiera y de personal y mejoramiento de los sistemas de información, que incluya un plan de informatización y estadística. (15 meses i.e.p.).</p>	<p>Voluntad política de cambio. Diseño aprobado y compromiso para su implantación y su sostenibilidad.</p> <p>Previo a la segunda etapa de consultoría, evidencia al Banco de que el diseño del sistema y sus mecanismos de financiamiento, han sido aprobados por la Comisión de Modernización del Poder Judicial.</p>
3.2 Equipamiento informático	Contratación de empresas para la dotación de software y hardware y la capacitación del personal en su manejo. (3 meses después de diseñado y aprobado el Plan de Informatización).	Equipos en funcionamiento (15 meses i.e.p.).	Que exista un plan de informatización y estadística debidamente aprobado y se haya cumplido con la condiciones establecidas anteriormente.

COMPONENTE No. 4 Acceso a la Justicia y Sociedad Civil			
Objetivo: Apoyar iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, encaminadas a disminuir las barreras de acceso ciudadano a la justicia.			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
4.1 Puesta en marcha de un fondo especial de acceso a la justicia.	<p>Contratación de 1 consultor nacional (1 mes) para la creación y reglamentación de un fondo especial que financie la ejecución y evaluación del desempeño de pequeños proyectos sostenibles de acceso a la justicia. (1 mes i.e.p.).</p> <p>Contratación de 3 consultores nacionales para integrar el Comité de Aprobación de Proyectos (1 mes i.e.p.), los que serían pagados cada vez que se requiera de su participación, de conformidad con el Reglamento Operativo.</p> <p>Actividades de difusión de la existencia del fondo, dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil. (3 meses i.e.p.).</p>	<p>Fondo especial establecido y reglamento operativo aprobado para la ejecución de proyectos dirigidos a la población de escasos recursos y particularmente a la mujer, la familia, los niños, las comunidades indígenas y las minorías étnicas, en temas tales como defensa legal, educación legal popular y uso de medios alternos de resolución de conflictos. (2 meses i.e.p.).</p>	<p>Existencia de un comité de aprobación de proyectos compuesto por el Director de PROJUSTICIA, el Coordinador del Programa y 3 miembros adicionales que garanticen la transparencia, objetividad y calidad técnica de los proyectos que sean aprobados.</p> <p>Reglamento Operativo en vigencia.</p>
4.2 Operación del Fondo.	<p>Inicio de la recepción y trámite de solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil, para el uso de los recursos del fondo. (5 meses i.e.p.).</p>	<p>Proyectos en ejecución y monto de los fondos asignados a la finalización del Programa. (18 meses i.e.p.).</p>	<p>Existencia de solicitudes aprobadas para el financiamiento de proyectos sostenibles.</p> <p>Uso adecuado del reglamento operativo.</p>

COMPONENTE No. 4 Acceso a la Justicia y Sociedad Civil			
Objetivo: Apoyar iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, encaminadas a disminuir las barreras de acceso ciudadano a la justicia.			
ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
4.3 Seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el fondo.	Contratación de 1 consultor(a) nacional por 6 meses (a los 4 meses i.e.p.). (Discontinuos de acuerdo a los proyectos en ejecución).	Informes de evaluación de desempeño y de impacto social de los proyectos, que justifiquen su continuación y/o réplica. (15 meses i.e.p.)	Ejecución de proyectos.

ECUADOR. TC-9407-35-6 - PRESUPUESTO POR CATEGORIAS			
CATEGORIA	BANCO	LOCAL	TOTAL
1. Firmas			
1.2 Emolumentos	560.000		560.000
a. internacionales x 3 meses	160.000		160.000
b. nacionales x 12 meses	250.000		250.000
c. nacionales x 7 meses	150.000		150.000
2. Consultores	551.900		551.900
2.2 Emolumentos	544.900		544.900
a. Internacionales			
(US\$9.000 x 23 meses)	207.000		207.000
b. Nacionales			
(US\$4.000 x 37 meses)	148.000		148.000
(US\$3.500 x 28 meses)	98.000		98.000
(US\$1.500 x 22 meses)	33.000	76.000	109.000
(US\$700 x 22 meses)	15.400	50.000	65.400
(US\$1.000 x 36 meses)	36.000	50.000	86.000
(US\$1.500 x 5 meses)	7.500		7.400
2.5 Viajes	7.000		7.000
3. Participantes (talleres)	79.500		79.500
3.2 Subsistencia (US\$115 x 400)	46.000	145.800	191.800
3.5 Materiales	9.500		9.500
3.9 Otros	24.000		24.000
6. Apoyo General	228.677		228.677
6.1 Locales (talleres)	11.000		11.000
6.3 Equipo	150.000		150.000
6.4 Suministros (software)	51.500		51.500
6.6 Personal apoyo	5.700	26.000	31.700
6.9 Otros	10.477	30.000	40.477
97 Fondo	500.000	7.200	507.200
Subtotal	1.920.077		1.920.077
98 Imprevistos	79.923	15.000	94.923
TOTAL	2.000.000	400.000	2.400.000

PROYECTO DE RESOLUCION

ECUADOR. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA JURIDICO
(PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA JUDICIAL)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe para que, en nombre y representación del Banco, proceda a suscribir los acuerdos necesarios con la República del Ecuador, y a adoptar las demás medidas pertinentes para la ejecución del plan de operaciones a que se refiere el Documento AT- _____, sobre una cooperación técnica no reembolsable para un Programa de Modernización del Sistema Jurídico (Programa de Apoyo a la Reforma Judicial).

2. Destinar para los fines de esta resolución, hasta la suma de US\$2.000.000, o su equivalente en otras monedas convertibles, con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales.

3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.